

Hasta el 17 de diciembre tienen plazo los aspirantes presidenciales con aval ciudadano para entregar sus firmas ante la Registraduría.

Desde el sábado regirá la vacancia judicial de fin de año, en la que algunos despachos cesarán sus funciones hasta el 13 de enero de 2026.

Primer plano

DOMINGO

EL TIEMPO • 14 DE DICIEMBRE DE 2025

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, en entrevista con EL TIEMPO, habla de las líneas rojas que está trazando la institución en relación con los grupos criminales que están en diálogos con el Gobierno, y señala la necesidad de que se evalúe en qué casos se está ante organizaciones con verdadera voluntad de paz.

Camargo revela que una orden de captura de alias Cararcá, el jefe de las disidencias de las Farc que mantiene su accionar criminal en plena negociación con la administración del presidente Petro, es una posibilidad latente. Sostiene que sus actuaciones han demostrado su independencia frente al Gobierno que la ternó y expresa su clara molestia frente a los mensajes del mandatario sobre el papel y la labor de la Fiscalía.

Esta semana, el presidente Petro le lanzó duras frases a través de su cuenta de X, y usted le respondió de manera firme. ¿Qué espera del Presidente en su relación con la Fiscalía y con usted?

Lo que espero es que el Presidente entienda que la Fiscalía es una entidad que trabaja 24/7, día a día, todas las semanas. A mí me sorprende que el Presidente a veces me saque del tema de que voy a decirle y pueda a la Fiscalía para que revise el tema de "Iván Mordisco". No. Nosotros venimos revisando el tema, que no es un tema, sino que es una organización armada ilegal que afecta a buena parte de los territorios más violentos del país, y lo venimos haciendo de manera organizada desde el día uno de mi llegada, y lo voy haciendo antes de mi llegada. Es como una ausencia de reconocimiento de que aquí todos los días estamos trabajando.

¿Un mensaje de esa naturaleza afecta la labor de la Fiscalía?

Yo no creo que le afecte. A mí particularmente me parece desmotivante, una falta de conexión con respecto al trabajo de la Fiscalía, que es un gran trabajo, es muy importante y nutritivo. Si usted revisa, todas las manifestaciones de los periodistas, las notas, las noticias de todo lo que está haciendo en todo el país la Fiscalía. Uno queda sorprendido con cosas como las que el Presidente pidió hace pocos días, una invitación a la Corte Penal Internacional para que se investigue a 'Mordisco'. Una solicitud que es absolutamente contravención a la ley, que se acaba de obtener una orden de captura contra él y 13 de los principales integrantes de su disidencia por genocidio en el Cauca. Y cuando hoy ese grupo armado no tiene una, sino muchas investigaciones andando en la Fiscalía. De hecho, hay dos condenas contra él. Entonces, no creo que le afecte. En la cárcel penal, que tiene un trabajo muy arduo y muy importante, que parece ser desconocido por el Presidente.

En su momento, el Presidente lanzó múltiples hipótesis sobre una investigación que la Fiscalía ha llevado de manera muy juiciosa: la del magnicidio de Miguel Uribe. ¿Qué percepción tiene hoy, después de todo lo que ha pasado, en relación con el caso?

Cuando eso sucedió, estábamos haciendo la visita a la Seccional de la Fiscalía del Ce-

Fiscal general pide evaluar qué grupos tienen una real voluntad de llegar a la paz

Luz A. Camargo dice que es probable que levante la suspensión de órdenes de captura contra alias Calarcá, hoy en un proceso de diálogos de paz. Se aparta del proyecto de ley de sometimiento.

ANDRÉS MOMPOTES LEMOS Y CARLOS LÓPEZ · REDACCIÓN EL TIEMPO @ELTIEMPO



La fiscal Luz A. Camargo estuvo en La Haya en un encuentro de Eurojust, organización de fiscalías de la Unión Europea a la que fue invitada Colombia para ocupar un asiento en la lucha contra el crimen transnacional. FOTO: MAURICIO MORENO. ET

sar. Tuve que ausentarme un buen rato de la visita para poder entender qué estaba pasando, porque estábamos haciendo coordinaciones desde allá y veníamos trabajando desde la hora cero de ese magnicidio para reconstruir el cómo, cuándo y dónde, que fue nuestra primera acti-

vida. La verdad es que esas hipótesis que lanzaba el Presidente y esos mensajes eran muy descomedidos respecto del rol que cumple la Fiscalía. La mayor virtud que tiene la Fiscalía es su independencia, su autonomía y de independencia, que hace parte de la Rama Judicial, y eso le da un carácter distinto a las fiscalías del mundo, no es una dependencia del Ejecutivo. Entonces, cuando el Presidente dice esas frases como "pedi a tal caso" que está ante el tal caso", pues no es una forma adecuada de enviar ningún mensaje. Aun si hubiese sido verdad que en algún momento él llamara la atención misma a la Fiscalía, eso no quiere decir que se atendiese o que no se está atendiendo debidamente, como lo podrían hacer perfectamente el Presidente del Congreso o la Corte Suprema. Hay un cierto tono en esas frases que a veces no es agradable, que no se complace con la forma en que nos desempeñamos.

Fiscal, ¿cuál es la posición de la Fiscalía frente al proyecto de sometimiento de bandas?

Como lo ha dicho muy firmemente la Sala Penal de la Corte Suprema, ese proyecto tiene un problema básico porque se presentó sin ninguna socialización hacia las entidades que estábamos llamadas a aplicarlo, y eso es absolutamente inadecuado en el trámite de un marco legal de semejante relevancia. Normalmente, lo que suele hacerse en un proyecto de esa naturaleza son mesas de trabajo, explicarles al propio Congreso y a los jueces de qué se trata la iniciativa. Eso

“Yo no tengo ninguna cercanía ni la tuve con el proyecto político del Presidente (Gustavo Petro), tampoco soy una militante política porque soy una funcionaria judicial”

no sucedió con el marco jurídico para la paz que presentó el entonces ministro Monteleagre. Lo dijo en su momento la presidenta de la Sala Penal, la doctora Myriam Ávila, que se sintió sorprendida, porque ella sabía que Monteleagre, obviamente eso no se lo ha socializado con la Corte. Una segunda observación tiene que ver con el contenido. En su momento se lo dijimos al ministro Monteleagre: ese proyecto sí generó dudas sobre una ley que, muy básicamente, dice que en temas de desmonte de organizaciones armadas ilegales pareciera bastarles con que hagamos el desmonte del componente armado. Lo que se olvidó, y que para nosotros es fundamental, es que los grupos armados están constituidos sobre una serie de negocios y economías ilícitas, que son la razón de ser que gobierna su existencia. Un grupo como el 'clan del Golfo' o las disidencias de las FARC, que son las mismas, no son, eso explica más a partir del negocio del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, de ese relacionamiento en territorios complejos y apartados. Entonces, una ley que pretende el desmonte de esas organizaciones no puede no abordar como se desmonta la parte

financiera, las rutas; quiénes son los componentes del Estado que cooperan con esas organizaciones, para que no se repita lo que hemos visto, que es frustrante. Una puerta giratoria donde se entrega un grupo con un nombre y a los meses o al año tenemos a los mismos integrantes con otro nombre pero con el mismo negocio. Este ejercicio se nos vuelve una puerta giratoria de soluciones de paz que, en realidad, terminan siendo frustración para la Nación.

Es muy importante que esa percepción suya la conozca el país. ¿Qué esperaría entonces que nase con ese proyecto?

No quiero hacer futurología, no me corresponde. Pero creería que el proyecto tiene muy poca probabilidad de ser aprobado, con toda sinceridad. No tiene el respaldo de las entidades del sector justicia. No tiene una estructura que aborde todos los temas que tiene que abordar juiciosamente un marco jurídico para lograr el desmonte de las actuales organizaciones armadas ilegales y las estructuras armadas organizadas de alto impacto.

Eso nos pone en un dilema: ¿qué va a pasar con las conversaciones que sigue abriendo el Gobierno? Acaba de anunciar acercamientos con bandas criminales como 'la Inmaculada', 'los Costeños', 'los Pepes'...

Lo que suele suceder en estos procesos es que el componente de justicia viene tras los acuerdos. No es algo inusual. Quiero recordar lo que pasó con la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. Firman el acuerdo en noviembre de 2016 y el marco jurídico, que es la JEP, se viene a aprobar a principios de 2018 (...) Es lo que suele pasar en todos los procesos de desmonte de este tipo de organizaciones y proce-

sos de paz. Esa podría ser la vía que se tome en estas conversaciones. Pero el tema que el Gobierno debería considerar es si en realidad estamos ante grupos armados con verdadera voluntad de paz; es el tema de fondo que gravita ahí. Creo que lo que ha conocido el país en el caso de 'Calarcá' es una realidad que dista mucho de un grupo que tenga una voluntad real de paz.

En el momento de la detención de la caravana de 'Calarcá', en julio del 2024, usted tomó la decisión que las capturas en flagrancia de negociadores iban en contra de un proceso de paz. ¿Hoy cree que debe seguir en vigencia esa idea?

Desde lo que sucedió con la caravana del 23 de julio en adelante, ya empezaba a generarse una serie de cambios y de líneas rojas sobre las acciones que no deberían ser cometidas. Dignos, que los quechuas no explotaban la caravana. Era un tema que no se había considerado hasta el momento.

¿Que pasaba con la flagran- cia? ¿Que pasaba si encontraba a alguien que estaba cometi- do de los delitos de las organiza- ciones armadas cometiendo delitos? Ese es un tema que yo particularmente tengo que decidir en una noche. La caravana está detenida en Anori, se trata de seis vehícu- los, pero yo tengo que decidir si la caravana hacen parte de las negociaciones. Había per- sonas que no tenían ningún requerimiento judicial. Res- pecto de los que no tenían sus suspensiones de órdenes de captura, yo tenía que decidir si la cala efectúa una cap- tura en flagrancia y adelanta una imputación. "Calara" particularmente no es sor- prendido con armas; él va en su vehículo de la UNP con su esposa. En el bolso de la espo- sa yo tenía que decidir si era un proveedor, unos cartu- chos, dinero en efectivo, un

monio de teléfono, discursos
duras y memorias. En este
sentido, "Calarca" no es
capturado, no hay un requie-
rimiento para que sea cap-
turado en ese momento. La dis-
cusión es sobre otros tra-
tamientos que se le han da-
do.

Las comunicaciones que yo
emito esa noche, dirigidas al
fiscal de Medellín son para
que tenga respaldo (...) La re-
cusión era: "¿cómo no proce-
do si tengo personas que me
denuncian?" Entonces le man-
da el requerimiento a esas
personas que son mis "Calarca".
Y le digo, mediante una
resolución, que este despa-
cho suspendió las órdenes de
captura presentes y futuras
que puedan presentarse con-
tra esta persona, "Calarca".
Entonces yo hago saber a esas
personas que ya no están
negociación y por este motivo
no puede ser capturadas.
Esas otras tres personas se
presentaron ante un juez y se
imputó a los que no tenían la
suspensión de orden de cap-
tura. Yo dije: "No sé cómo
es que esa misma materia
se había un menor de edad,
se ha dicho que esa presen-
cia revelaba que había sido ob-
jeto de un reclutamiento ille-
cito. Pero eso es tan no eviden-
te que la propia fiscal de Me-
dellín lo cuestiona."

No entra en el radar el me-
tor del reclutamiento por una ra-
zón: porque eso requiere
más investigación. A mí no
me basta encontrar a un deci-
dor en un carro para decir
que hay reclutamiento. Yo
quiero ver qué pasa, necesi-
to guardar esa persona es hija
de quién, por qué está en ese
vehículo, con autorización de
quién, haciendo qué, si fue re-
clutado efectivamente... Es
algo que yo creo que no pasaba
ahí y no se supone que el
requisito de reclutamiento no
existe ahí, en ese escenario
de la caravana. Y tampoco
existe una decisión mía de que
era en libertad a "Calarca"
como se ha mencionado. Eso
no sucedió, porque tampoco
fue objeto de una acción de
impugnación en ese momen-
to.

Un año y medio después, ¿qué piensa? No hay claridad sobre los ceses del fuego, sobre muchas cosas que no dependen de la Fiscalía, pero a la Fiscalía le compete tomar ciertas decisiones.

Básicamente, ese tema del 23 de julio nos enseña que las alarmas de la dificultad que tiene hacer operativa una parte de la ley de paz tocan a un miembro de la fuerza pública se senta en que hay una suspensión, como la aplica. Y pasan varias cosas. Primero, viene por fortuna la emisión de la sentencia de consenso, que es una buena noticia es muy importante porque aborda el tema de la suspensión, pero hace una serie de claridades que la misma ley no tra. La Corte dice que cualquier decisión de una persona que no tiene que entender la privación de la libertad tiene que hacerse evaluando no solo lo que dice la ley, es que es muy poco, sino que tienen que evaluar los actos de voluntad de una persona que se le da. Se tiene que verificar que además de que la persona sí es miembro representante, que era lo básico que traía la ley, haya gestos que indiquen que está empezando a ser una persona que dialoga. Y esa ventana que nos abre la Corte Constitucional nos permite, después del 30 de agosto de 2024, marcar dos líneas rojas. Una primera línea roja fue el tema de las masas de trabajo que

Habla la Fiscal...

VIENE DE LA PÁGINA 2

tuvimos con la oficina del Comisionado de Paz, establecimos que, en los casos de capturas en flagrancia por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, no operaría la suspensión de órdenes de captura. ¿Cuál fue la reflexión que hicimos? ¿Qué pasa si el 23 de julio, dentro de esa caravana, hay, por ejemplo, un secuestro? ¿O qué pasa si encontramos que hay armas prohibidas en la guerra, o un cadáver? Es decir, ¿cómo decimos: no, aquí no ha pasado nada, la orden de captura está suspendida, por favor, señores, sigan? Sabíamos que eso era sensato. Entonces ahí ponemos una primera línea roja, y a partir de ahí, las resoluciones de suspensión de órdenes de captura que emite la Fiscalía traen esa salvaguarda. La otra línea roja que nosotros pusimos tiene que ver con las órdenes de captura con fines de extradición. Cuando evaluamos la sententación de la criminalidad sobre el marco de suspensión de órdenes de captura, que es la parte que compete a Fiscalía, encontramos que está limitada al ámbito de las capturas nacionales, pero no a las capturas con fines de extradición.

¿Cuándo se puso esa línea roja?

Ahí mismo. En ese mismo momento empezamos a decir que no opera ni para casos de flagrancia por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra y secuestro, y agregamos el tema de las órdenes de captura con fines de extradición, que son dos líneas rojas muy importantes y que empezamos a marcar también una postura de la Fiscalía frente a lo que puede y no puede pasar. Y hay una tercera que es aún más importante.

¿Cuál es, fiscal?

Sucedió después del 15 de enero de 2025, cuando el país amaneció con la grave noticia de que el Eln, que estaba en una mesa de diálogo, arremetió en el Catatumbo contra la población civil, causando los mayores desplazamientos de los últimos tiempos, comete una serie de asesinatos sistemáticos, muchos de ellos contra firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales, población civil, que son personas protegidas en el marco de hostigamientos y atentados ilegales. (...) Personas que hacen parte del frente 33 de las Farc también fueron objeto de esas acciones del Eln (...). En ese momento, empezamos inmediatamente las investigaciones, con muchísimas dificultades, porque allí había enfrentamientos armados y había una situación terrible de violación de derechos humanos. Nos comunicamos en su momento con la oficina del comisionado, algo muy parecido a lo que pasa ahora con 'Calarcá', y estábamos esperando una reacción. Pero pasa una semana y esa reacción llega. (...) Personas que explícitamente se declaran que es de mi parte, donde yo revoco la suspensión de las órdenes de captura, precisamente con apoyo en ese llamado que hizo la Corte Constitucional respecto de lo que es la voluntad de paz y como acciones que a lo que se combatía el Eln, pero se compadecían de ninguna manera.

La revoca sin tener que consultar al Ejecutivo...

No consulto con el Ejecutivo.

¿Y eso puede volver a pasar si usted considera que en algún otro proceso de paz no hay voluntad?

Si, señor.

¿Va a pasar con 'Calarcá' tras la revelación de Noticias Caracol?

Cuando recién sucedió lo de 'Calarcá', dije en una de prensa que esperaba que el Gobierno se pronunciara sobre el tema. Que yo entendía que el balón estaba en la cancha del Gobierno, porque nosotros no suspendemos órdenes de captura por voluntad nuestra, sino que respondemos a solicitudes del presidente de la República, que ha designado como vocero o representante a alguien. Él debería ser quien evalúe esa situación. Pero si eso no sucede, muy probablemente esa es una decisión que nosotros vamos a tomar.

¿Pero va a tomar la decisión, ya que el Gobierno no le ha respondido?

Yo no había tenido reuniones con la oficina del Comisionado en estos días. También hay que decir que por el momento no había una reunión en La Haya. Este jueves tuve reunión con un representante de la Oficina del Comisionado. Le expuse cuál era nuestra postura como Fiscalía, lo grave que nos



La fiscal general, Luz Adriana Camargo, en su oficina del búnker de la Fiscalía, ubicado en Bogotá, junto al director de El Tiempo, Andrés Mompotes Lemos, y el periodista Carlos López. FOTO: MAURICIO MORENO ET

parecía el contenido de la información que ha venido circulando y lo que eso dice de la voluntad de paz de esa facción de las disidencias. El delegado quedó en transmitirle esto directamente a Ott y Patino, para lo que ellos debían realizar. Pero lo que yo quiero decir es que, como pasó en enero, si eso no sucede, muy probablemente seamos nosotros los que tomemos la iniciativa, porque si creemos que esto debe tener una consecuencia, necesariamente. Ciertamente quiero señalar que si ustedes me preguntan a mí si prefiero la paz o la guerra, pues yo prefiero la paz como cualquier ciudadano. Pero esto tiene que estar rodeado, en verdad, de unos procesos serios, sólidos, organizados. Eso es lo que tiene que evaluar el Gobierno en este momento.

A nivel general, ¿le preocupa cómo se ha manejado la 'paz total'?

A mí me preocupa el tiempo que le resta al Gobierno y lo que puede significar para la Fiscalía que queden abiertas mesas de diálogo sin alguien que lidere el proceso, y con compromisos, si se llegan a adquirir, bilaterales. Yo tengo que decir que hay cosas que el país pareciera no conocer, como lo que está pasando en Tumaco, Putumayo o en la zona de Nariño, donde la violencia ha tenido un desescalamiento a niveles no vistos. Tumaco, siendo tan pequeño, pasó de ser la ciudad que culpaba al segundo lugar en índice de homicidios a tener homicidios o a tener muy pocos en el último tiempo. Igual sucede en la región del Bajo Putumayo, que es donde operan las disidencias: efectivamente ha habido un desescalamiento importante de la violencia, lo que está atado a esos diálogos o negociaciones. Eso es una buena noticia para esas regiones, claro, desconocerlo sería necio. Ahora, ¿cómo logramos que eso en verdad se mantenga a través de un proceso serio y estable? Es la gran disyuntiva en la que está el país, y la preocupación mía es que eso termine sin un orden, la casa que termine la Fiscalía un poco encartada con personas respecto de las cuales se han hecho compromisos en términos de justicia que no se pueden hacer, porque como lo habíamos, no hay en este momento un marco jurídico.

Fiscal, ¿qué siente y qué responde cuando una parte del país y algunas voces dicen: lo que pasa es que hemos visto aquí la actuación de una Fiscalía que es muy cercana al Gobierno y eso explica cosas como las demoras en el caso de 'Calarcá'.

La Fiscalía no es un actor en los diálogos de paz. La Fiscalía no puede, y no le corresponde, salir a defender o atacar las mesas de diálogo, o enseñar cuál es la agenda, o esto que estoy contando -porque se me pregunta- de que si ha habido un desescalamiento de la violencia. Eso a nosotros nos pone en un papel difícil. Nosotros participamos en lo que tiene que ver con la suspensión de las órdenes de captura,

que son necesarias para que las líneas puedan avanzar, con las mismas cosas que hemos puesto. El miércoles, precisamente a raíz de la reunión que teníamos en la Corte Suprema, algún magistrado hacía una reflexión de cómo tal vez (la captura en flagrancia) no debiera limitarse solo a crímenes de guerra, y me parece que es sensato, que tal vez deberíamos extenderlo a cualquier delito. Es algo que el jueves discutimos con el equipo que trabaja conmigo; es algo que tiene que ver con la voluntad de paz que se demuestra, porque es cierto que las organizaciones armadas ilegales no suspenden sus actividades entre tanto se adelantan los diálogos, pero los que si tienen que suspender sus actividades ilegales son los voceros representantes, que son miembros de esas organizaciones, independientemente si el delito es o no es de lesa humanidad. Entonces, sí, probablemente vayamos a hacer esa modificación. Dirán quienes piensan como usted lo mencionaba en su pregunta que es algo tardío, pero la verdad es que no es un proceso pacífico ni fácil llegar a cómo debe aplicarse una ley tan compleja. La Ley 2272 no es una ley muy reciente, es una ley de la República, es una ley que no tiene un marco temporal. No fue diseñada para cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, él termina su mandato y esa ley va a seguir siendo ley, y es posible que algún presidente quiera utilizar ese marco legal, y debe ser un marco que lo tengamos muy bien decantado. A hoy, yo creo que está mucho más decantado. Yo entiendo también las preocupaciones de ese sector que usted menciona, y también entiendo que hay una narrativa que asume que, como a mí me terminó el Presidente, yo soy una fiscal del Presidente. A mí me terminó un Presidente porque eso es el sistema que está establecido para designar fiscal general, pero yo quiero recordar que el Presidente no terminó a tres amigas o a tres personas de su partido político. La verdad es que él terminó a tres mujeres que no conocía, a tres mujeres cuya trayectoria es una trayectoria en el Poder Judicial. Yo no tengo ninguna cercanía ni la tuve con el proyecto político del Presidente, tampoco soy una militante política porque soy una funcionaria judicial. Eso no es muy fácil de entender y la gente piensa que es no es cierto, que es mentira. La verdad, más que molestarme, comprendo que hay cosas que a las personas no les caben en la cabeza, como eso de que se nos terminó sin habernos conocido.

¿Su relación con Estados Unidos está bien?

Mi relación con Estados Unidos está muy bien.

¿Por qué, entonces, la insinuación del Presidente sobre su supuesto temor de entrar a la Lista Clinton?

No tengo la menor idea; la verdad, yo no sé. No he tenido el tiempo que he estado acá, dificultades con los EE.UU.: trabajamos con seis agencias muy importantes y muy delicadas. Trabajamos muy bien con el Departamento de Justicia, que es nuestro par. Tenemos unas muy buenas relaciones no solo en términos de la ayuda en lo que tiene que ver con los grupos transnacionales para extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, que normalmente es por delitos transnacionales, sino que hemos empezado a trabajar de otra manera con las autoridades judiciales de Estados Unidos en temas tan importantes como lavado de activos. Es nuestra otra priorización importante, que tiene que ver con las agencias criminales, pero con un enfoque y con un abordaje distinto, con un abordaje mucho más estructural, no haciendo solo la persecución de las rentas criminales, porque cuando perseguimos solo ren-

tas criminales, pues se nos fue todo el negocio ilícito. Hemos tenido casos muy importantes en narcotráfico y lavado de activos, como el de Arauca y el Eln.

Usted dice que trabaja con Estados Unidos, pero ante esta crisis diplomática que se ha desatado, ¿le han expresado la tranquilidad de que no será incluida en ninguna lista?

El mensaje de nuestros pares del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido el mismo siempre. Tenemos una relación antigua entre el Departamento de Justicia, la Fiscalía General y la Policía de Colombia, que es tan importante en las labores de persecución del crimen transnacional. La crisis que menciono no se ha sentido en la Fiscalía. Yo no he tenido una crisis con las autoridades de justicia norteamericanas. El miércoles tuve la visita del encargado de negocios, que está como embajador encargado, del delegado del Departamento de Justicia que está en Bogotá, que es nuestro par, en una cita que se había acordado hacía 10 días. Fue un saludo cordial, un agradecimiento del embajador muy lindo por el trabajo que realizamos.

¿Cómo va el tema de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol?

Brevemente, tenemos dos líneas de investigación. Una que tiene que ver con el financiamiento de la campaña presidencial. Tuvimos la campaña de copias por la posible violación de topes electorales. Nosotros ya adelantamos esa hipótesis delictiva. También se ha examinado el tema porque hemos tenido información concluyente respecto de posible financiamiento electoral ilícito. Esa investigación está en sede de indagación y la adelanta la Fiscalía de la Dirección contra la Corrupción. En ese mismo despacho, otro equipo adelanta una segunda investigación que tiene que ver con la compra del apartamento, con las posibles relaciones con algunos beneficiarios de contratos de Ecopetrol y si existiría alguna relación entre una y otra cosa, o si habría influido el presidente de Ecopetrol en beneficiar a algún sector.

Usted esperaba que el presidente de Ecopetrol cumpla con las citas de la Fiscalía...

Yo espero que sí. El 15 de diciembre está citado a interrogatorio.

¿Qué pasa si no asiste el lunes?

El va a asistir. Esperemos que asista. Ahora, lo que pasa es que, aun asistiendo, y eso es un tema que todos debemos tener en el radar, quien está siendo investigado tiene derecho a guardar silencio. Eso es algo que yo no sé si va o no va a pasar. La cita al interrogatorio puede aportarnos mucho, como puede no aportarnos nada. Lo que también creo es que ningún investigador serio espera resolver el caso a través de lo que le dice el investigado.

Cuando se han conocido estos llamados a personas cercanas al Presidente, ¿el justo ha sacado trinos cuestionando a la Fiscalía. ¿Cree que hay relación en ello?

Reflexionando sobre ese tema, yo tengo que decir que el Presidente, en las reuniones que hemos sostenido, que no son muchas, es una persona respetuosa. El Presidente no se inmiscuye en los temas de la Fiscalía. Pero hay dos tonos: el tono del Presidente en las reuniones y el tono del Presidente en los trinos, en la cuenta de X. Yo no puedo explicar la razón de eso. A mí me causa curiosidad y a veces me causa molestia, por supuesto, porque hay trinos que en verdad son irrespetuosos; no son adecuados, creo mi-

El proceso de Nicolás Petro

Fiscal, hay un caso que es delicado, y que alimenta ese tipo de comentarios sobre una supuesta cercanía con el Gobierno. Es el de Nicolás Petro. ¿Hoy cómo está ese caso?

Sobre ese caso ha habido más mito que realidad. En el momento en que me poseo, Nicolás Petro ya había sido acusado ante un juez por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¿Eso qué significa? Que una vez presentada la acusación, la Fiscalía deja de ser la directora de la investigación. El director es el juez. Nosotros, Fiscalía, ¿qué pasamos a ser? Sujetos procesales. No tomamos decisiones, las toma el juez. Esa es la realidad en la que yo encuentro el caso. Se mencionó que hubo un acercamiento entre los delitos de una negociación. Es cierto, la defensa pidió recién posesionados una reunión para que se discutiera una posible negociación, pero eso nunca llegó a feliz término; no se habló nunca de la posibilidad de una negociación. Se estaba hablando de una sentencia preacordada, que era una rebaja de pena a cambio de una aceptación de responsabilidad, pero tampoco hay consenso porque las aspiraciones de la defensa distaban mucho de la propuesta de la Fiscalía. Entonces, ese capítulo de la negociación se cerró ya hace rato. Concluimos nuestra participación como sujeto procesal en la presentación de las pruebas para juicio. ¿Qué sí fue? El juicio oral, que es donde se practican las pruebas y donde después el juez define la decisión que debía adoptar en la sentencia. Inicio de la audiencia pública, la posibilidad de negociación. Es tremendamente paradójico que a nosotros se nos censurase y se nos diga que envetamos, que archivamos, que no movimos el caso de Nicolás Petro, porque yo vuelvo e insistir que eso no nos correspondía a nosotros porque ya hubo acusación. También se dijo que habíamos querido mover el fiscal, que era el doctor Mario Burgos, en realidad el fiscal que impidió porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló cargos contra él. Por eso se designó otra fiscal, a través del sistema de reparto para evitar que se tuviera la sospecha de que se estaba designando a un fiscal amigo, a dedo. Se buscó obrar de la manera más imparcial posible para brindar la transparencia que debe ofrecer la Fiscalía en este caso.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA A LA FISCAL GENERAL, LUZ ADRIANA CAMARGO, EN EL TIEMPO.COM

